



Bernat Muniesa

Dictadura y Transición.

La España lampedusiana

II: La monarquía parlamentaria.



Publicacions i Edicions



—vuelvo a repetir— la Dictadura como pasado histórico y aceptaran la Monarquía como forma de Estado. Tan complejo proyecto debía contar forzosamente con el consentimiento de la Oposición Democrática, pero habría de ser conducido de modo estricto por ellos mismos para preservar el *atado y bien atado*. Y esa conducción es la que realizó, desbordados Fraga y Areilza, el neófito Adolfo Suárez con el beneplácito de la Familia Real y el auxilio de Fernández-Miranda, un no-demócrata pero fidelísimo servidor del rey como antes lo fuera de Franco.

Cierto que cabía la posibilidad de que el conjunto de la Oposición se apoyara en los movimientos sociales antifranquistas para radicalizar la situación y, simultáneamente, utilizara el *factor exterior* para una ruptura política: el contexto europeo-occidental —factor en el que venimos insistiendo— instalado ya todo él en el sistema democrático-liberal y con el proceso comunitario en marcha. Utilizar ese proyecto hubiera aislado al franquismo en todas sus variantes: la Dictadura coronada se habría descompuesto en poco tiempo; también habría exigido la formación de un Gobierno provisional representativo de aquella oposición para dirigir la consiguiente ruptura política. No fue el caso porque de tiempo se había previsto lo que realmente fue y entre esas previsiones Suresnes, en 1974, fue una clave especialísima, como trataré más adelante.

Dictadura y Transición. La España lampedusiana.

II: La monarquía parlamentaria.

Bernat Muniesa

**Dictadura y Transición.
La España lampedusiana.**

II: La monarquía parlamentaria.

Publicacions i Edicions



ÍNDICE

LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA	11
Introducción	13
Capítulo 1. <i>La gazza ladra. Tiempos transitivos: 1976-1978</i>	19
La fuerza del destino: una desequilibrada correlación de debilidades	20
Los franquistas ante la Transición: legitimar el legado del 18 de julio de 1936	22
Los Borbón	22
Los poderes fácticos históricos: la Iglesia Católica y el Ejército	25
Los poderes fácticos económicos	27
La oligarquía política franquista	29
¡Por una Oposición que se oponga!.	32
Que la prudencia no nos haga traidores...	34
Suresnes 1974: la primera depuración del PSOE	37
La ciudadanía	41
Acto I: el fracaso de Tartuffe	42
La sombra de Cánovas del Castillo	45
El despido de Arias Navarro	47
Acto II: el general della Rovere	51
La amnistía: una mercancía racionada	54
La jungla de las ambigüedades: política con política	56
Acto III: el consenso electoral	60
El terrorismo blanco: la matanza de la calle de Atocha	60
La Santa Semana de 1977	62
Unas elecciones posmodernas	64
La Operación Tarradellas	69
Acto IV: la Constitución	72
Los pactos de la Moncloa	73

Consagrar privilegios, santificar abusos y perpetuar injusticias....	74
La batalla autonómica	77
Ruido de sables	79
La guerra sucia: destruir la CNT	81
El frente exterior: los amagos neutralistas de Suárez	84
Capítulo 2. Las conjuras. Tiempos termidorianos (1979-1981)	87
El lenguaje de las urnas (1979).	90
Tensiones fácticas y la apertura del autonomismo	96
El PSOE: la gestación del felipismo	100
El caluroso verano de 1979: la segunda depuración del PSOE	103
Nuevo sindicalismo y agitaciones sociales (1979-1980)	106
La calle en llamas (1979-1980).	108
La aceleración autonómica	112
El desencanto	116
El frente interno de la UCD	117
El frente opositor parlamentario	120
El frente de la política exterior	122
El frente desestabilizador.	123
Los golpes de Estado (1981)	126
La Gran Derecha sin partido: el golpe de Estado blando	126
La dimisión de Adolfo Suárez	128
El golpe de Estado duro: el 23-F	130
El interregno (1981-1982)	135
La resaca: el recurso a la OTAN	136
Panorama desde el puente: la decadencia de UCD	138
El Consejo de Guerra.	142
En la pira transitiva: la quema de la UCD y el PCE-PSUC en llamas	144
La guerra chiquita	146
El aurea mediocritas	148
Capítulo 3. De la euforia a la perplejidad. Tiempos felipistas (1982-1995)	173
Un hito histórico: el PSOE en el poder (1982-1986)	176
Rumasa y Banca Catalana	179
Las elecciones municipales de 1983: refrendo al PSOE.	180
Ante un horizonte neoliberal	183
La OTAN: cuadro I	186
Vísperas europeístas	188
Santiago Carrillo: en la pira de la Transición	192

La OTAN: cuadro II	194
El trienio social-neoliberal (1987-1989)	202
Las crisis de identidad	205
Los fracasos de Barrionuevo y Maravall	208
La huelga general	212
Tras la tempestad, la calma.	216
Hacia los grandes festejos (1990-1992)	223
La corrupción y el tráfico de influencias	224
Guerristas y renovadores	225
El final político de Alfonso Guerra	228
Tiempo de festejos: luces y sombras	235
El trienio mefítico (1993-1995)	241
El solchaguismo: la deriva neoliberal del PSOE	242
El cambio del cambio	244
La imparable corrupción	250
El pozo negro del «caso GAL» y la falacia de la conjura republicana	260
El aurea mediocritas II	267
 Capítulo 4. El PP al gobierno. Tiempos de camuflaje (1996-2000)	289
Un PP en presente condicional	291
Crispaciones	294
La marcha de Felipe González: la ejecutiva del PSOE contra Josep Borrell	297
La eliminación de Julio Anguita y la tregua fallida de ETA	299
El sindicalismo oficialista: UGT y CCOO	302
El fin del milenio: hacia el Aznarato	304
 Capítulo 5. El aznarato: modo de ser y estilo. Tiempos neoliberales (2000-2004)	313
El Aznarato en el núcleo del mal	314
La deconstrucción social	317
Aznar el guerrero	320
En el avispero iraquí	323
 Epílogo	327
 Bibliografía	333

LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA

A Carlos Muniesa: *rehusó vivir bajo la conjura de los necios de la Tierra y se exilió entonces al planeta Tlon.*
Y allí vive en el placer, el sosiego y la fraternidad.

— ¿Porqué caminamos tan deprisa si no vamos a parte alguna?
— Tienes razón. ¡Venga, pues! Vamos a echar una carrera para acabar de una vez con este jodido asunto.

CHICO y GROUCHO MARX

Una de las consecuencias (*de la Transición*)...ha sido el escrupuloso respeto a los derechos adquiridos, cualesquiera que fueran sus orígenes, con posterioridad a julio de 1936, aunque ese principio, en algunos casos, consagre privilegios, santifique abusos y perpetúe injusticias. La aceptación de este supuesto, reconocido en la Constitución...

EL PAÍS. 22 VIII 1979

INTRODUCCIÓN

En los últimos días del curso académico 1995-1996 de la Universidad de Barcelona, al finalizar una de las clases dedicadas al tema de la llamada Transición, incorporado a la asignatura Mundo Actual, y cuando recogía mis apuntes de la mesa, se me aproximó un alumno jovencito y, con voz disminuida, casi confidencialmente, me dijo *yo no quiero esto, no quiero esta sociedad que nació así*. Por la premura del cambio de profesor sólo pude responderle que *no hay democracia en el aparecer humano en el devenir; no podemos elegir ni la familia ni la nación ni la sociedad que nos gustaría, ni siquiera podemos elegir el no aparecer. Estamos donde estamos y lo único posible es hacernos a nosotros mismos y sobre todo evitar que otros hagan por nosotros, aunque aquí, amigo, topamos con el poder y sus intereses*. El joven marchó con la mirada encendida y se perdió entre la masa de compañeros por los pasillos hacia la cafetería.

* * *

Franco no sólo murió sin cancelar el espíritu de la Guerra Civil, sino que lo extremó en sus días posteriores antes de ingresar en la agonía (véase el primer volumen de esta obra). Seguían, pues, oficialmente, una España «victoriosa» y una España «vencida». Y la España vencida, no sólo fue derrotada en los frentes, sino, después, encarcelada, torturada y fusilada: humillada hasta lo indecible en nombre de la Patria y de Dios, pues los directivos de este dios en la Tierra demostraron que la maldad divina puede ser infinita. Y aunque la Transición posfranquista levantó —y mantiene— un vergonzante muro de silencio, vergonzante por estar soldado con cemento que ellos llamaron democrático, extraído de un subsuelo que no era aquel desde el que escribió con extrema lucidez Dostoievski, sino el sub-

suelo de la impostura ... A pesar de todo eso, digo, permanece una memoria que a veces asoma al exterior, ya sea en forma historiográfica (Eduard Pons Prades, Abel Paz, Gregorio Morán...), literaria (por ejemplo, *Los girasoles ciegos*, de Alberto Méndez, o en los trabajos de Andrés Trapiello), periodística (como las crónicas sabatinas del mismo Morán en *La Vanguardia*) o simplemente ciudadana (como las actuales búsquedas de desaparecidos por iniciativa de familiares y/o de organizaciones cívicas en fosas comunes). Cuando puede, que es casi siempre, el oficialismo democrático ahoga mediante el silencio tan molesta memoria, cerrándole sus circuitos de expresión o dando cuerda a los maquilladores, tan abundosos desde 1977, para sostener la ficción democrática y/o para desvirtuar el pasado.

Cito una pequeña muestra, valiosa por ser reciente. El 25 de septiembre de 2004 el diario *El País*, portavoz del oficialismo democrático, daba noticia (con el rótulo de *Editores en el exilio: el viaje de ida y vuelta*) de un encuentro habido en la Casa de América, en Madrid, concitado bajo el título de *Una pedagogía secreta de la libertad. La labor de las editoriales durante la posguerra española*. Daba cuenta, la crónica del periodista Miguel Mora, de las intervenciones de, entre otros, Javier Pradera, Mario Muchnik, Enric Folch y Poppy Grijalbo (hija del Juan Grijalbo). Y, naturalmente, la crónica gira en torno a la palabra de Javier Pradera, hombre de larga trayectoria desde su pasado comunista hasta su instalación transitiva en ese poderoso órgano de opinión e información que es *El País*. Se dijeron nombres como Editorial Losada, Fondo de Cultura Económica (FCE), Editorial Grijalbo..., además de EMECÉ, Editorial Sudamericana, etcétera. Junto a nombres prestigiosos de editores, como Orfila, Urgoiti, Gonzalo Losada, Antonio López Llausás, el citado Grijalbo, Vicente Rojo, Joaquín Díez Caneda... Ciertamente, promotores emeritos todos ellos de la difusión cultural que estaba prohibida en España y protagonistas de una forma de lucha contra la Dictadura. La automedalla como excombatiente llega cuando se dice que Pradera fue *en 1962 el primer gerente del FCE en Madrid y que tras pasar unos meses en la cárcel por recibir en su despachó a Sánchez Dragó, que había traído de Italia una película prohibida, su trabajo consistió en tratar de rescatar del censor a decenas de autores y títulos...* Nada que objetar a todo ello, pues es verdad y, al fin y al cabo Pradera es el jefe del periodista Mora, y desde luego los editores citados ocupan un espacio de honor en la lucha cultural antifranquista. La luz se apaga, sin embargo, con las omisiones, siendo una de ellas ostentosa: Ruedo Ibérico y su promotor José Martínez Guerricabeitia —a quien también de-

dico estas páginas— sepultados en el subsuelo por el Santo Oficio laico y transitivo. Ni *España hoy*, ni los *Horizonte Español*, ni el tesoro intelectual y documental que son los *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, ni las ediciones de las obras de Brenan, Thomas, Sourtworth, Luciano Rincón, Borkenau, Claudín, de decenas de autores... y de artistas, como Antonio Saura, Manolo Millares, José María Gorris, Carlos Mensa (a quien quiero recordar aquí especialmente), Vázquez de Sola, Úrculo... No existieron ni Ruedo Ibérico ni Pepe Martínez. Ellos, los censores transitivos, los de la nueva generación del *espinazo curvo* (Juan Ramón Jiménez *dixit* al referirse a intelectuales colaboracionistas con el franquismo en la guerra y la posguerra) sabrán, pero que no nos vengan con cuentos (León Felipe *dixit*). Y ligado a este tema, debo recordar que los materiales de Ruedo Ibérico (archivo RI) me han sido fundamentales para el redactado del primer volumen de esta obra y también para parte de este segundo volumen, hasta 1979, cuando la editorial se extinguió.

Conocí a Pepe Martínez siendo yo muy joven y miembro del clandestino Sindictato Demócratico de Estudiantes, y fue ya en mi primer viaje a París, donde el local editorial de la rue de Latran era referencia obligada que frecuenté desde aquel 1964. Un lugar donde aportaba materiales de archivo del sindicato clandestino de Barcelona, y donde conocí a personalidades como Fernando Claudín y Enrique Líster, pues aquella Casa estaba abierta a todas las opciones antifranquistas, aunque Pepe mantenía su vital libertarismo. Allí, los hermanos Joan y Josep Maria Masip, Julià de Jodar, Manolo Vázquez Montalbán (colaborador más asiduo de los *Cuadernos*), Alberto González Troyano, Valentí Sererols y Josep Maria Sanahuja iniciamos más tarde una colaboración con la editorial para realizar un *Diccionario del Franquismo* que quedó inacabado (y no fue publicado) cuando se había cubierto la mitad del proyecto, por razones económicas. Algunos de nosotros pasamos entonces meses en París y Pepe Martínez solía invitarnos a comer o cenar, pues disfrutaba de la compañía de lo que él llamaba los «jóvenes jacobinos del interior». Años después, en 1977, después de las primeras elecciones transitivas, le encontré casualmente en Barcelona, donde él vivía circunstancialmente en la calle Viladomat. Estaba sentado en la cafetería *Manhattan* de Urgell-Roselló: me senté junto a él y sin decir palabra estallamos en una risa cómplice bajo la cual subyacía el valleinclanesco espectáculo del transformismo político que se desplegaba en el país. Luego, me invitó —siempre pagaba él— a una cerveza y me dijo que pensaba ir a Madrid e intentar instalar allí la editorial. Todavía volví a verle, ahora en

esa ciudad, en 1984, en el Ateneo. Ruedo Ibérico era ya un recuerdo, víctima de las traiciones transitivas. Me dijo entonces: *amigo mío, el futuro demostrará que Ruedo hizo una labor absolutamente superior a la realizada por toda la oposición del exilio junta*. Y rememorando los hechos recientes, añadió: *han ganado los franquistas y la oposición que finalmente no se opuso a nada: ellos quieren borrar la memoria, pero ahí queda Ruedo*. Falleció en 1986: le hallaron muerto en su domicilio madrileño.

* * *

Dos Españas —decíamos—, luego pobladas de herederos de uno y otro bando, más ya que de protagonistas de la guerra, todos encajados en el seno de un amplísimo cuerpo social indeciso, desconcertado y, sobre todo, ignorante, sociológicamente impregnado de los hábitos de la larga Dictadura. Una de las dos Españas, la de los vencedores y sus herederos, encabezados por el príncipe Juan Carlos, se aprestó el 20 de noviembre de 1975 a rendir homenaje a su Caudillo y pocas horas después de que Arias Navarro, el jefe de Gobierno, se asomara lloroso a las pantallas televisivas para dar noticia del óbito, decenas de miles de adictos comenzaron a desfilar ante el cadáver de Franco encajado en un armón militar instalado en el Palacio Real de Madrid. Mientras, en otros espacios mucho más discretos, clandestinos, en hogares, empresas y recintos universitarios, privadamente se consumieron miles de botellas de cava para celebrar la muerte del tirano. Así son las cosas.

En el lapso entre el fallecimiento del dictador y su solemne entierro, al que sólo asistió un personaje de —digamos— «relieve» internacional, el genocida chileno Augusto Pinochet, el Príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, compareció el día 22 de noviembre de 1975 ante unas Cortes que habían perdido a su Caudillo y, ya como rey Juan Carlos I, volvió a jurar su adhesión a los Principios Fundamentales de la Dictadura (en 1969 lo había hecho). Fue un acto ciertamente escueto y sobrio, donde no se oyó aquello de «¡El Jefe ha muerto! ¡Viva el Jefe!», y el nuevo monarca apuntó que *la institución que personifica integra a todos los españoles... Todos deben entender, con generosidad y altura de miras, que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional*. No hubo, sin embargo, cancelación oficial del espíritu de la guerra, pues no se decretó una amnistía: tan sólo un parco indulto y la supresión de la vetusta Ley de Responsa-

bilidades Políticas dictada en 1939, un tridente amenazador aún contra quienes ejercieron cargos y actuaron, desde 1934, en el marco de la breve Segunda República. Hubo, en cambio, una rápida confirmación del fosili-zado Arias Navarro, el «carnicero de Málaga», en la jefatura del Gobierno y el nombramiento del extutor real, Torcuato Fernández-Miranda, como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. En el mismo paquete de medidas, Juan Carlos I otorgó el Señorío de Meirás a la viuda del dictador, doña Carmen, y el Ducado de Franco a su hija, Carmen Franco Polo.

En la revista *Cambio 16*, que se movía en la penumbra legalidad-ilegalidad, pudo leerse que *se ha perdido una gran oportunidad de evolucionar hacia la democracia* (archivo Ruedo Ibérico; en adelante RI). Sin embargo, la Transición democratizadora —de apellido liberal, no lo olvidemos— estaba ya en marcha. Los herederos inteligentes de la Dictadura, a los que se llamó «franquistas evolucionistas», sabían que instaurar la democracia liberal era la única salida posible para su supervivencia, en un contexto geográfico, Europa occidental, donde se habían extirpado las otras últimas dictaduras fascizantes, la de Grecia y la de Portugal, y donde estaba en marcha un imparable proyecto entonces llamado Comunidad Económica Europea, en evolución hacia la actual Unión Europea. Una España persistente en el llamado Régimen del Dieciocho de Julio, aislada, no hubiera podido resistir por la evidencia de aquella realidad. Por tanto, los franquistas evolucionistas lo fueron porque entendieron perfectamente que no tenían otro camino.

Resumiendo: los franquistas evolucionistas, con la dinastía Borbón al frente (se jugaban su empresa, que es el Trono), eran conscientes de lo que acabamos de exponer y apostaron por la vía política democratizadora. Es más, estaban decididos —como así fue— a conducir el proceso ellos mismos. También estaban dispuestos a abrir vías para la integración política de aquellas fuerzas opositoras fusiladas, secuestradas, encarceladas y torturadas aún por la Dictadura que ellos —los franquistas evolucionistas— encarnaban, fuerzas que les eran indispensables para transformar el sistema político. Mas, por otra parte, esa élite franquista tenía la voluntad de permanecer, y esa permanencia exigía que la Dictadura, desde 1936, quedase legitimada como etapa histórica, política, jurídica, policial y criminal... Voluntad de permanencia que halló respuestas sociales opositoras, pero la respuesta de los partidos políticos históricos —y no históricos— proscritos hasta entonces fue, como se detallará en las páginas que siguen,

colaboracionista. De hecho, en el tablero transitivo, o transaccionista, o transformista, varias piezas decisivas estaban ya instaladas y prestas a iniciar el juego político antes de 1975, y entre ellas la que se preveía decisiva: el renovado Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La voluntad de permanencia del franquismo evolucionista triunfó, cobró realidad aquel todo quedará atado y bien atado que anunciara el dictador Franco para garantizar la impunidad de sus fieles y se institucionalizó la Monarquía Parlamentaria, fundada en el juego político de la democracia liberal, todo certificado, atado, por la Constitución de 1978. La impostura se consumó y generó una realidad que ocultaba la verdad, como diría el maestro Agustín García Calvo.

Así pues, en definitiva todo cambió, desde luego, para que todo siguiera igual, desde luego también. Lampedusa, con su nostálgica sabiduría y su leve sonrisa irónica, habrálo anticipado en la Italia de su época. Una vez más, ahora en forma de gazza ladra, la historia se burlaba de quienes lucharon por la libertad y la justicia, cumpliendo una de sus leyes.

Finalmente, debo señalar que desde la Transición asumí la redacción de la sección Historia de España correspondiente a los Suplementos binauales de la Gran Enciclopedia Ilustrada de Espasa-Calpe (GEI-EC), un trabajo de cronista que obligaba a realizar una labor investigadora y explicitarla en cien folios por cada entrega. Los materiales que recopilé han sido una fuente documental insuperable para realizar este volumen y así quiero que conste, como también quiero que conste que por parte de la empresa editora, radicada en Madrid, jamás, hasta la última colaboración, en 2000-2001, hallé traba alguna a mis exposiciones.

Capítulo 1

LA GAZZA LADRA. TIEMPOS TRANSITIVOS: 1976-1978

Comencemos por señalar que el concepto de *Transición* ha persistido (otros han sido *Transacción* y *Transformismo*) para definir el proceso político oficiosamente iniciado antes de la muerte del dictador Franco y subrayar una nueva etapa de la historia española, historia ya poblada con sugerentes rótulos desde remotos tiempos llamados por la historiografía «contemporáneos», tales como Trienio Liberal, Década Ominosa, Bienio Progresista, Sexenio Revolucionario, Restauración, Dictadura primorriverrista, Dictablanda, Dictadura Franquista... combinados con otros menos singulares nominalmente, como Primera y Segunda Repúblicas que, sin embargo, eran mucho más «exóticos» por sus contenidos, en contraste abierto con la marcha de la historia de España.

¿Cuáles son los límites cronológicos de esta Transición? Para entenderlos, oficialmente su origen debe situarse en el acceso de Juan Carlos I al trono (22 noviembre de 1975), aunque oficiosamente, dentro y fuera de España, el proceso había iniciado su marcha, en la espera de la inminente muerte de Franco. ¿Y su cierre? Para unos —un sector de quienes participaron en la operación transformista—, la Transición culminó en 1978 con la oficialización de la Constitución que daba contenidos democratizadores a la Monarquía: un simple deseo que los hechos frustrarían. Para otro sector de los mismos, el paréntesis se clausuró en octubre de 1982 con el acceso al Gobierno del PSOE, ciertamente un hito en la historia española: otro deseo insatisfecho.

Para otros sectores, marginales del oficialismo, en cambio, a la vista de evoluciones y crisis posteriores, la Transición todavía no se ha podido

cerrar... Y quizá se prolongará indefinidamente. Fue, desde esa percepción, el parto de una extraña criatura engendrada por una nueva oligarquía política. Un sistema político que encajaría con el concepto de *poliarquía liberal*, capacitado para otorgar y controlar libertades consensuadas, condicionada por su complejo origen, en el cual la Dictadura del general Franco, tras casi cuarenta años de ejercicio —y muerto ya éste— halló una nueva y postrera legitimación, la única que le faltaba para sumar a las de Hitler, Mussolini, los Borbón, Pío XII, Churchill, Washington...: la legitimación de un sector de los herederos de aquellos demócratas republicanos, socialistas y comunistas que tan brutalmente fueran perseguidos y exterminados. (Entre los históricos, sólo el Movimiento Libertario, la legendaria Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, se marginó de la transacción.) Pero ellos, al otorgar su legitimación, han debido renunciar a sí mismos y a su pasado, aunque el pasado siempre regresa: de ahí el valor de la historia.

En definitiva, Franco siguió teniendo «suerte» después de muerto. El nudo resultante del *atado y bien atado* no fue ni desanudado ni, desde luego, cortado.

La fuerza del destino: una desequilibrada correlación de debilidades

El escritor comunista, que fuera amigo y compañero en los *años de plomo*, Manuel Vázquez Montalbán, definió un día la Transición como una *correlación de debilidades*. Acudamos, pues, a las fuentes de *El País*, diario madrileño que nació el 4 de mayo de 1976 y que, desde esa aparición en el devenir español, encarnó —y encarna— los paradigmas del proceso transitivo. El 22 de agosto de 1979, caluroso verano en el que el PSOE, principal partido de la oposición, se hallaba descabezado por la dimisión —provisional— de su secretario general, Felipe González (véase más adelante), un editorial de aquel diario sorprendió a sus lectores sensibles con lo siguiente: *Una de las consecuencias de lo que Vázquez Montalbán considera el resultado de una «correlación de debilidades» ha sido el escrupuloso respeto a los derechos adquiridos, cualesquiera que fueran sus orígenes, con posterioridad a julio de 1936, aunque ese principio, en algunos casos, consagre privilegios, santifique abusos y perpetúe injusticias. La aceptación de este supuesto, reconocido en la Constitución, ha representa-*

do, en determinados campos, una pesada carga para el erario público, sufragado mediante los impuestos de los ciudadanos... He aquí, pues, una provocadora invitación para el historiador, que no para el *maquillador*, y, sin duda, también para cualquier persona sensible al tema de la libertad.

Es, como mínimo, singular que una Constitución que se presenta a sí misma como democrática *consagre privilegios, santifique abusos y perpetúe injusticias*. Quizá no sea un caso único en la historia del constitucionalismo, pero indiscutiblemente esa Constitución es un poderoso imán para la curiosidad: la curiosa y desafiante mujer de Lot, sin duda, hubiera buscado con afán en los densos contenidos constitucionales y habría encontrado, al fin, la clave en el artículo noveno: *La jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales... quedan garantizados por la Constitución...* No es necesario, pues, acabar la lectura del artículo que en sí mismo es digno de figurar en lo que el sociólogo norteamericano Charles Wright Mills llamaba la «jerga» cuando se refería a los escritos de los funcionalistas (como Talcott Parsons; véase *La imaginación sociológica*, México DF, 1970: un libro altamente recomendable aún para los estudiantes que se inician en las ciencias sociales).

Clave esa, pues, descifrada como producto de aquella *correlación de debilidades* entre las fuerzas que concurrieron en el proceso transitivo. Correlación, sin embargo, no exacta, pues en ella hubo un *desequilibrio* que se encuentra asimismo incrustado en el decisivo editorial de *El País* que ya hemos citado: *El diseño de la reforma suarista fue aceptado y asumido por la abrumadora mayoría de las formaciones políticas y de las fuerzas sociales situadas, a lo largo de cuatro décadas, a la intemperie de la ilegalidad y la represión*. La Reforma fue un diseño suarista, es decir, nacido de las entrañas de la Dictadura (de hecho no fue diseñada por Adolfo Suárez, sino conducida por él). Nacida y dirigida por los franquistas, y finalmente aceptada por la abrumadora mayoría a la que el editorialista se refiere: tal es el centro de gravedad, esa *forza impuesta por el destino* y por la voluntad de quienes aceptaron, con mayor o menor facilidad, ingresar en el proceso. Esas *fuerzas* que cita *El País* fueron las élites de los partidos políticos históricos y las de otros nuevos que se formaban con prisas, partidos y grupos cuyos militantes combatieron la Dictadura y, ciertamente, pagaron por ello con cárcel y sangre. Partidos y grupos que, al morir el tirano Franco, fueron sumergidos en el magma llamado Oposición Democrática y que para ingresar en el destino

que les diseñó el franquismo evolucionista tuvieron que cancelar su propia memoria y abrirse heridas cuyas cicatrices aún no se han cauterizado.

El 25 de abril de 1978, *El País* reprodujo unas declaraciones del veterano líder comunista Marcelino Camacho, realizadas al diario francés *Le Figaro*: *La elección de una política de reconciliación era vital. Teníamos que innovar o perecer. Y hemos innovado con tanto éxito que Maquiavelo mismo a nuestro lado parece un aprendiz.* En este juicio vergonzante subyace el drama de aquella Oposición Democrática que, en la descompensada correlación de debilidades, fue a remolque de los herederos más inteligentes de la Dictadura, porque éstos no se reconciliaron con nadie ni, por tanto, renegaron de su pasado. ¿Quién se reconcilió, pues? Quizá la Comisión de los Nueve por su propia y estricta cuenta. Fue, en definitiva, un entreguismo a la iniciativa franquista (evolucionista).

Tras laertura conviene, ahora, pasar a los protagonistas de esta *forza del destino*, sin la música de Verdi, que no podemos reproducir aquí.

Los franquistas ante la Transición: legitimar el legado del 18 de julio de 1936

A continuación, y antes de entrar en la dinámica transitiva, he creído conveniente especificar los roles de las diversas instancias franquistas ante el proceso político que se abrió a la muerte del dictador, es decir y por este orden: la dinastía Borbón, los poderes fácticos históricos (Iglesia Católica y Ejército), los poderes fácticos económicos y la oligarquía política del propio sistema.

Los Borbón

Como se ha expuesto en el primer volumen de esta obra, Franco pervirtió a la Monarquía y ésta, encarnada por la dinastía Borbón —alfonsina—, se dejó pervertir. El Caudillo se apoyó en la rama dinástica que había encarnado la Corona en los últimos siglos porque otra veleidad hubiera constituido un dislate. La rama carlina de la misma familia estuvo presente en las convergencias del Movimiento Nacional, pero entronizarla nunca anidó en los proyectos de Franco (además, las querellas internas del carlis-

mo no eran precisamente una garantía de solidez). Por otra parte, en aquellos años fueron abundosas las declaraciones de Juan de Borbón asumiendo *todos* los valores de la Monarquía Tradicional, para disolver el incordio carlista.

La sublevación militar de julio de 1936 contó con una tempranísima legitimación borbónica, del infante Juan de Borbón y del rey, su padre Alfonso XIII. La perversión franquista fue involucrar a la Monarquía borbónica en sus proyectos y romper la sucesión legítima encarnada precisamente por Juan de Borbón para implicar como futuro rey al hijo de éste, el príncipe Juan Carlos. Ciento es que, tras haber contribuido a legitimar el naciente Estado totalitario, el pretendiente Juan de Borbón, en su breve etapa de paladín democrático, exigió al dictador una Monarquía Constitucional, pero también es cierto que tras el Manifiesto de Lausana (1943) los entusiasmos constitucionalistas y democráticos del jefe de la Casa Real se apagaron y cedieron paso (1947) a un juego de complicidades con el Caudillo que posibilitaron el que de las entrañas de la Dictadura surgieran la Monarquía y el futuro rey Juan Carlos I. La complicidad de Juan de Borbón fue una de las constantes de aquella etapa histórica, por mucha cosmética que los apologistas hayan acumulado sobre su veleidosa conducta. Las *Monarquías hoy no se heredan, se han de ganar*, dijo Maura en 1962, dudando de la calidad luchadora del pretendiente legítimo a la Corona. El mismo Franco, que en varias de sus cartas había mostrado su desprecio por los Borbón, fue consciente de haberles corrompido con la operación «Príncipe de España», pero también lo era de que aquéllos pervertirían luego la naturaleza de su legado político. (Véase el primer volumen de esta obra.)

De hecho, desde 1947 (la reunión en el yate *Azor*) hubo un juego inicialmente a dos bandas, Franco y Juan de Borbón, que luego se amplió a tres, cuando el príncipe Juan Carlos creció educado bajo la tutela del Régimen dictatorial. Un juego que aun después de la muerte del dictador la Casa Real tuvo que mantener hasta que la Monarquía nacida del Dieciocho de Julio pudiera reconvertirse: así, el 24 de noviembre de 1975, dos días después de la proclamación real de Juan Carlos I, el gabinete de prensa de su padre emitió una nota que incluía un embrión de programa político previamente aceptado por el nuevo rey: *La Monarquía, para ser útil a España —decía— debe ser un poder arbitral independiente que facilite la superación de la Guerra Civil, el establecimiento de una justicia social que elimine la corrupción, la consolidación de una verdadera democracia pluralis-*

ta, nuestra plena integración en la Comunidad Europea y el pacífico acceso del pueblo español a la soberanía nacional (Rafael Borràs, *El rey de los rojos. Don Juan de Borbón: una figura terguiversada*, Barcelona, 1996). Fue, sin duda, un acto formal, forzoso sin embargo, pero nadie puede dudar de que entre padre e hijo no estuvieran ya aclarados esos destinos, pues ¿acaso tenía la Monarquía otro porvenir que no fuera asumir ese programa? Un factor era decisivo: el *entorno exterior*, una Europa occidental expurgada ya de todas las dictaduras.

Debe señalarse que Juan de Borbón no «abdicó» inmediatamente en su hijo. Como sostiene Rafael Borràs (*ob. cit.*), entre la muerte del dictador, el día 20 de noviembre (1975), y la proclamación real de Juan Carlos por las Cortes, el 22 de aquel noviembre, hubo un lapso de cuarenta y ocho horas que Juan de Borbón podía haber utilizado para legitimar a su hijo y anticiparse a los organismos franquistas sin que el *búnker* de El Pardo pudiera impedirlo. No fue así: el jefe de la dinastía prefirió permanecer como «pretendiente» por si fracasaba el proyecto transaccionista por causa de una eventual Oposición Democrática rupturista contra la herencia franquista: entonces él podría «ofrecerse» a esas fuerzas políticas como reserva, presentándose «libre» de compromisos con el franquismo. Se trató de una actitud preventiva para proteger el Trono como propiedad familiar.

En esa perspectiva, Juan de Borbón no asistió a la entronización de su hijo como monarca el 22 de noviembre en las Cortes, pues por encima de cualquier circunstancia lo que convenía era permanecer en el Trono recién adquirido, el negocio de toda dinastía. Los dos protagonistas de la familia Borbón tenían desde tiempo pensado pervertir el legado de Franco, pero esa perversión era su única opción también. Como he dicho en la introducción, en 1975 España era el único Estado de Europa occidental —el *entorno geopolítico inmediato*— sometido a una dictadura, pues Grecia y Portugal las habían cancelado con sendas rupturas políticas. ¿Qué porvenir hubiera tenido el Estado español sin abrirse a la democratización, siendo aún reciente el abrupto aislamiento al que se vio sometido en septiembre-octubre de 1975 a causa de las ejecuciones dictadas por el Gobierno de Franco? Sólo teniendo en cuenta ese *factor exterior* la opción de la Monarquía no pudo ser otra que la decidida de tiempo por sus dos protagonistas y que pronto dio contenidos a la Transición. Por estar esa evolución implícita y previamente asumida, no puede definirse que la conversión de la Monarquía al constitucionalismo fuera producto de debilidad alguna, era simple-

mente —repito— el *único camino*. De mantener una Dictadura Coronada la Monarquía se hubiera hundido con ella en poco tiempo, como se hundió Alfonso XIII por apoyar al general Miguel Primo de Rivera en 1923. Por eso el entreguismo de la Comisión de los Nueve fue su salvavidas dorado.

La debilidad de la Corona radicaba en su origen: una *instauración* —no restauración— decidida por Franco a partir de los Principios Fundamentales del Dieciocho de Julio, a los que Juan Carlos I tuvo que jurar, como he dicho, fidelidad dos veces (en 1969 y 1975): *Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional*. Por ello, existía el peligro de que esa debilidad emergiera si la Oposición Democrática, imprescindible para legitimar la nueva Monarquía, hubiera exigido cuentas por aquel pasado y ejercido el recurso a cuestionarla como forma de Estado.

No fue ése, sin embargo, el caso. Los Borbón, echados del Trono por Napoleón Bonaparte y regresados con Fernando VII mediante imposición del Congreso de Viena, expulsados luego por el general Prim y vueltos con Alfonso XII y su madre María Cristina, tras un golpe militar, y echados, una vez más, por el sufragio que proclamó la Segunda República en 1931, volvían también una vez más, ahora con Juan Carlos I, impuesto por el dictador Franco.

Los poderes fácticos históricos: la Iglesia Católica y el Ejército

La simple existencia de este factor, *poderes fácticos históricos*, constituye un hecho diferencial de la historia española en el panorama europeo y nos recuerda la definición valleinclanesca puesta en boca de Max Estrella, el protagonista de *Luces de bohemia* (véase el primer volumen de la presente obra). Ese esencialismo eran la Iglesia Católica y el Ejército, aunque quienes acuñaron el rótulo de «poderes fácticos» durante la Transición se referían más bien a la segunda institución.

Ciertamente la Iglesia Católica no fue obstáculo para la reconversión política de la Transición, que fue vista por sus dirigentes como un traje hecho a medida. En tanto que institución, se había desenganchado progresivamente de la Dictadura en el último quinquenio y sus relaciones con el oficialismo franquista estaban deterioradas al fallecer el dictador. Respon-

sable histórica de las endémicas dificultades de modernización de la sociedad española, pues por su causa, como señaló Manuel Azaña, *todos los factores propios de la modernización tuvieron que penetrar en España clandestinamente*. Su pasado con la Dictadura era objetivamente gravoso: legitimadora de la Guerra Civil como Cruzada; divinizadora de Franco hasta el grotesco delirio; santificadora de las atrocidades perpetradas por el Régimen; nutridora de sus necesidades políticas con hombres de la Acción Católica y la Obra de Dios... Una suma de debilidades que únicamente tuvieron el frágil contrapunto del abad benedictino catalán Escarré, cuyas posiciones prodemocráticas sólo fueron asumidas por la Iglesia española en los inicios de los años setenta.

Conducida desde entonces por el inteligente cardenal Enrique Vicente y Tarancón, el hombre adecuado para el momento conveniente, los lastres fueron arrojados rápida y masivamente. La Oposición Democrática, que hubiera podido *recordarle* a la Iglesia Católica su tremenda responsabilidad por el pasado a la hora de hacer balance histórico, olvidó prematuramente y en su propia debilidad ejerció en los últimos años el recurso de la protección clerical para combatir la Dictadura.

En cualquier caso, la Transición fue un vehículo diseñado a la medida de la Iglesia Católica y con él sus dirigentes pudieron no sólo pasearse como demócratas, sino que a pesar de la aconfesionalidad de la Constitución han seguido gozando de prerrogativas y privilegios, persistiendo en sus injerencias sobre la sociedad civil.

El Ejército fue el poder fáctico *per se*. Su situación era opuesta a la de la Iglesia Católica cuando se instauró la Monarquía en noviembre de 1975. Totalmente pervertido y corrompido por Franco, a la vez humillado y halagado por él, factor de victoria perenne y usado abundantemente en la represión, su unidad, cimentada en la brutalidad, era su fortaleza. Favorecido por el azar (o el crimen), Franco se despojó en plena Guerra Civil de sus máximos rivales militares, Sanjurjo y Mola. Los más viejos, como Cabanillas, no fueron rivales, y a los agresivos Yagüe y Queipo de Llano los arrinconó hasta reducirlos a figuras decorativas. A Varela, Aranda, Kindelán y otros monárquicos supo segarles el terreno manipulando su timorato y oportunista monarquismo juanista. Al pronazi, falangista y veleidoso «republicano» Agustín Muñoz-Grandes le corrompió con nombramientos y galardones, y Juan Bautista Sánchez, el último «conspirador monárquico», murió repentinamente en extrañas circunstancias aún no aclaradas (véase

el primer volumen de esta obra). Franco en persona controló los ascensos al generalato y cuidó de promocionar a los militares *azules*, los antiguos alfereces provisionales, que más que falangistas eran simplemente franquistas.

Como se ha dicho, la fortaleza del Ejército (la cúpula militar) ante la Transición era su unidad, cimentada por Franco en base a crearle un currículum sangriento permanente y otorgarle prebendas económicas en las empresas monopolistas. La Unión Militar Democrática (UMD) surgida como movimiento militar democrático en 1974 fue un lejano espejismo sin trascendencia y generales como Díez-Alegría un espécimen exótico carente de poder efectivo. Sin embargo, junto a esa fortaleza que era la unidad, existía la debilidad. Al morir Franco su Ejército quedó descabezado: él era el general de los generales, el Generalísimo. Ahora, en noviembre de 1975, el Ejército era una institución antidemocrática, rabiosamente antidemocrática, pero acéfala. Su cabeza fue sustituida por *cabecillas*, pequeños sosías del dictador fenecido: los García Rebull, Iniesta Cano, Pérez Viñeta, De Santiago, Ángel Campano, Pita da Veiga, Álvarez Arenas, Coloma Gallegos... Una larga retahíla de gritones: *hablaron mucho y no hicieron nada*, diría unos años después el fascista Blas Piñar (archivo RI). De todos ellos sólo uno, Jaime Miláns del Bosch, como se verá en su momento, se arriesgó tardíamente, en 1981, para intentar regresar a un pasado imposible. Por todo ello, a los franquistas evolucionistas les costó hallar militares de alto rango para comprometerlos con el proceso político, generales como Gutiérrez Mellado y Vega Rodríguez. En sus *Cuadernos de la Transición*, Areíza repite varias veces que el almirante Pita da Veiga *miraba insistentemente a su alrededor para saber dónde radicaba el poder*, y ciertamente Franco ya no estaba allí.

Los poderes fácticos económicos

Cuando hablamos de los poderes fácticos económicos, en primer lugar debe citarse a la oligarquía histórica: la vieja nobleza agraria andaluza-castellana-extremeña (naturalmente hoy muy reciclada y modernizada), la gran burguesía financiera e industrial vasca y la gran burguesía financiera e industrial catalana. Como añadido, debe adjuntárseles la «nueva burguesía», franquista, surgida a lo largo de la Dictadura utilizando sus carnets del Movimiento Nacional para configurarse como otro poder económico.

En conjunto, ese poder económico fue simbótico con el poder político encarnado por el Estado del Movimiento Nacional y aceptó el intervencionismo político ejercido por éste casi hasta el final en lo que podría llamarse la política económica, aunque el intervencionismo perdió progresivamente fuerza. A pesar de ello, como se ha dicho en el primer volumen de este trabajo, en el último quinquenio de la Dictadura los poderes económicos comenzaron a sentirse molestos por la presencia de la Organización Sindical, el enorme fósil que interceptaba los esfuerzos de los empresarios y ejecutivos de grandes corporaciones para entablar negociaciones con los trabajadores en huelga durante la espiral de conflictos laborales, especialmente de los últimos dos años (1973-1975).

En este punto conviene recordar que los poderes económicos del país, los oligárquicos y los liberales, tuvieron que *pagar* a la Dictadura por haber salvado sus intereses en la Guerra Civil y, posteriormente, por mantener el terror sobre las clases trabajadoras. Ese pago significaba *admitir* un andamiaje paternalista, de naturaleza fascista, en lo social: la *revolución pendiente*. Soportaron, como digo, el intervencionismo estatal, pero realizaron grandes acumulaciones de capital, tanto en el período autárquico como en el desarrollismo opusdeísta. Y también, como pago por los servicios prestados, tuvieron que soportar la presencia de militares y burócratas en los consejos de administración empresariales. Las compensaciones, repito, fueron sustanciosas y, de hecho, el Plan de Estabilización de los años cincuenta sólo causó estragos en las pequeñas y medianas empresas, y favoreció el dominio de los grandes intereses en un mercado lentamente liberalizado en el que los monopolios eran intocables. El paso de la autarquía a una liberalización tutelada por el Estado (el desarrollismo) fue, para esos intereses, un tránsito sin riesgos (véase el primer volumen de esta obra).

La crisis energética de 1973-1974 comenzó lentamente a modificar las reglas del juego económico en el capitalismo internacional. En España, los emigrantes que con su marcha habían facilitado el «pleno empleo» del que alardeaban los caciques políticos falangistas, ahora regresaban al faltar trabajo en Europa y, al mismo tiempo, las empresas españolas mostraban inquietud por las dificultades para poder despedir trabajadores, pues la estructura laboral de la Dictadura obligaba a tener plantillas quasi-fijas y cuando un trabajador abandonaba la empresa debían relevarle por otro contratado, contratos que eran indefinidos.

Cuando se llegó a la frontera de la Transición el capitalismo español

exigía ya otras reglas del juego: facilidades de despido, contratación laboral flexible, liquidación del paternalismo, menos cargas impositivas y libertad a su *mano oculta* en el mercado para ampliar sus beneficios: se prefiguraba ya el neoliberalismo. Mas, sus presiones sobre el aparato político de la Dictadura no fueron irresistibles, aunque un cambio político que fuera en el sentido neoliberal sólo podía redundar en beneficio económico. No hubo oposición de los grandes grupos financieros al proceso transitorio: *laissez faire*, pues.

La oligarquía política franquista

¿Qué era el Movimiento Nacional cuando Franco murió? Un magma de tendencias centrífugas que sólo la presencia física del dictador, ya que no su acción intelectual, agotada en los últimos años, mantenía artificialmente soldado. Para crear el Movimiento Nacional —recordemos lo dicho en el primer volumen— el Caudillo tuvo que pervertir el falangismo y el tradicionalismo, pactar con la Iglesia Católica una simbiosis cavernícola y descuartizar los cuadros monárquicos con aviesos amagos. Cuando le convino, activó el falangismo, al que paulatinamente encerró en la mastodóntica Organización Sindical, al tiempo que se nutría, siguiendo las iniciativas de su delfín Carrero Blanco, de personal confesionalista, primero con ace-neepistas y luego con el Opus Dei, los más capaces para gestionar las cuestiones públicas. Las fricciones más importantes entre las diversas familias del Movimiento Nacional lo fueron, primero, entre falangistas y monárquicos hasta poco más del final de la Segunda Guerra Mundial, y las resolvió Franco a favor de la ya conocida versión *azulada* de la Monarquía (institución repulsiva para el falangismo), y posteriormente entre el mismo falangismo (la burocracia), y los tecnócratas de la Obra de Dios. Esta última crisis se le escapó del control a Carrero Blanco, con un Franco francamente disminuido, que no ejercía ya como antaño: estalló en 1969 cuando el ministro de Información, Fraga Iribarne, aliado circunstancial del desvaído falangismo (José Solís), permitió que circulara en los medios de comunicación el *affaire MATESA* (véase el primer volumen de esta obra).

Tras la muerte de Carrero Blanco (1973), con Arias Navarro el Gobierno se pobló de burócratas que, más que falangistas, eran simplemente franquistas. Por ello, a medida que se aproximaba el desenlace físico-químico

de Franco y se evaporaba el esencial punto de referencia, ¿qué permanecía? Un enorme aparato —repito— burocrático, el Movimiento Nacional fusionado con la maquinaria del Estado: ambos eran de hecho una misma cosa.

A medida que Franco se reducía, el magma Movimiento Nacional-Estado (salvando el Ejército, claro) acusaba tendencias a la dispersión: lo centrífugo se manifestó con el inoperante espíritu del Doce de Febrero de Arias Navarro (1974) que las circunstancias convirtieron en un espectro en menos de seis meses. Fue entonces que Fraga, el impetuoso, definió las tendencias posibles del magma: *a*) el inmovilismo o mantenimiento a ultranza del Movimiento Nacional; *b*) remodelarlo, sustituir las camisas azules por las blancas y promover en su interior las asociaciones políticas unidas por el Dieciocho de Julio, y *c*) abrirse con precisión y pausa a algunas de las fuerzas democráticas de la perseguida Oposición para, sin ruptura, evolucionar hacia la formación de una nueva clase política bajo la Monarquía parlamentaria, una opción que tenía el entorno europeoccidental como referencia. El feroz José Antonio Girón de Velasco, el de la *revolución siempre pendiente*, ahora inválido y renqueante, personificaba la primera opción; Carlos Arias Navarro, forzado por las circunstancias, intentó liderar la segunda posibilidad; el propio Manuel Fraga (y con el José María de Areilza) era un promotor de la tercera estrategia, más acorde con los intereses de los Borbón, tras considerar suicida la primera e inviable la segunda: el límite del fraguismo se concretaba contra la legalización del PCE.

Sin embargo, por debajo —o por encima— de esos nombres referentes había numerosos clientes y aguardaban sorpresas. La primera opción, la *ultra*, permaneció enquistada y confiada en el recurso al Ejército para conservar el Movimiento Nacional. La segunda opción, el *pluralismo dentro del Movimiento Nacional*, estaba naufragada justo con el cadáver de Franco aún caliente. La tercera, la *transitiva*, se nutría constantemente de clientes de la segunda y pronto, en su desarrollo, hallaría dos muros que su líder natural, Manuel Fraga, no podría o no sabría derribar: la disolución del Movimiento Nacional y la legalización de *toda* la Oposición Democrática, incluido el PCE. Por esas incapacidades Fraga —como se verá— perdió el control de un tren hecho a su medida y, desbordado, fue suplido por un auténtico *sherpa*: Adolfo Suárez, un hijo de tercera generación del Movimiento Nacional, perfecto conocedor de la guarida y sin absurdos escrúpulos anticomunistas. Además, contaba con un mentor decisivo: el incombatible Torcuato Fernández-Miranda, una especie de mayordomo de palacio.

Al morir Franco el célebre recurso al «prietas las filas» dejó de funcionar. Y, sin embargo, debemos señalar que no es necesario recurrir a la Física para saber que también en los procesos sociológicos se cumple la Ley de la Inercia y, por tanto, que *todo Sistema tiende a conservarse* (Maquiavelo descubrió este principio pensando en la Historia antes que Newton la hiciera respecto a la Naturaleza). En este plano debe recordarse —y esto es fundamental— que las tendencias políticas del Movimiento Nacional, *todas*, estaban de acuerdo en una cosa: *preservar el legado del tirano Franco*. La disensión surgió en el *cómo*.

Para el obtuso y fanático sector *ultra* la idea de conservar la Dictadura era simplemente mecanicista: mantener el diseño y prolongar la Dictadura, ahora coronada, con un monarca sujeto a las Leyes Fundamentales, un Consejo Nacional inquisidor y unas Cortes unanimistas que se encargarían de impedir veleidades. En este sector dominó pura y simplemente la inercia: sus análisis no incluían ni la nueva dinámica de la sociedad española ni el *adverso contexto político exterior*. Una posición fanática e inviable, pues.

La segunda tendencia, representada por el pronto obsoleto espíritu del *Doce de Febrero* asociacionista que dirigió Arias Navarro, pretendía asimismo, desde luego, conservar el legado de Franco y tuvo en cuenta, aunque de modo limitado y deformado, las nuevas realidades sociológicas internas, que *no* las externas o europeizantes: se trataba de adaptar la Dictadura para conservarla operativa. En la *adaptación* radicó la diferencia con los ultras y los mecanismos eran —repito— las asociaciones políticas en el inviable marco del Dieciocho de Julio. Tras dos años y pico de fallidos y naufragios esa tendencia se desintegró: unos, los menos, regresaron al ultraísmo; otros, los más, se incorporaron a una tercera vía.

La tercera vía eran los *franquistas evolucionistas*: el *que todo cambie para que todo siga igual*. Pensada, repito, inicialmente por Fraga (con el torpe tope de la exclusión del PCE) y por José María de Areilza, y deseada por los Borbón, pretendía asimismo *conservar el legado de Franco*, pero como simple pieza de museo, aunque, eso sí, respetada y, sobre todo, legitimada como etapa histórica mediante un *certificado de impunidad*. Esta vanguardia reformista tuvo una visión mucho más lúcida de la realidad y en función de ella el sistema se dispuso a evolucionar sin ruptura hacia la democracia liberal y, por tanto, permitir el ingreso en ese proceso de las fuerzas políticas perseguidas, con la doble condición de que éstas legitimaran

—vuelvo a repetir— la Dictadura como pasado histórico y aceptaran la Monarquía como forma de Estado. Tan complejo proyecto debía contar forzosamente con el consentimiento de la Oposición Democrática, pero habría de ser conducido de modo estricto por ellos mismos para preservar el *atado y bien atado*. Y esa conducción es la que realizó, desbordados Fraga y Areilza, el neófito Adolfo Suárez con el beneplácito de la Familia Real y el auxilio de Fernández-Miranda, un no-demócrata pero fidelísimo servidor del rey como antes lo fuera de Franco.

Cierto que cabía la posibilidad de que el conjunto de la Oposición se apoyara en los movimientos sociales antifranquistas para radicalizar la situación y, simultáneamente, utilizara el *factor exterior* para una ruptura política: el contexto europeo-occidental —factor en el que venimos insistiendo— instalado ya todo él en el sistema democrático-liberal y con el proceso comunitario en marcha. Utilizar ese proyecto hubiera aislado al franquismo en todas sus variantes: la Dictadura coronada se habría descompuesto en poco tiempo; también habría exigido la formación de un Gobierno provisional representativo de aquella oposición para dirigir la consiguiente ruptura política. No fue el caso porque de tiempo se había previsto lo que realmente fue y entre esas previsiones Suresnes, en 1974, fue una clave especialísima, como trataré más adelante.